



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 110013335026201500676-00
ACCIÓN: EJECUTIVO
ACTOR: LUCÍA CASTRO DE NAVARRO
OPOSITOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP

A través de providencia de data 18 de marzo de 2019¹, éste Despacho Judicial ordenó dar cumplimiento a la liquidación de crédito realizada por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia de fecha 20 de marzo de 2018, por un monto total de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$28.833.355.82), por concepto de intereses moratorios.**

De la misma manera, en dicha providencia se requirió a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, para que acreditara el pago de la obligación en virtud de lo dispuesto en el artículo 447 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta la liquidación realizada por el Superior.

Con memorial radicado el 26 de junio de la presente anualidad², el apoderado judicial de la entidad ejecutada allega Resolución No. RDP 011175 del 4 de abril de 2019, por medio del cual da cumplimiento al pago de la obligación y solicita la terminación del proceso por pago de la obligación.

Pues bien, una vez analizado el acto administrativo que modifica la Resolución UGM 001138 del 15 de julio de 2011³, éste Despacho Judicial vislumbra, que el mismo no cumple con los parámetros establecidos por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de proveído de data 20 de marzo de 2018, en el que claramente señaló lo siguiente:

¹ Folios 190-191

² Folios 196 a 200

³ Folios 197-200

“Se debe **CONFIRMAR parcialmente** la sentencia apelada, como quiera que los procesos cuya demanda se presentó antes de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y cuya sentencia se dictó antes o después de esta misma época, como en el caso de marras, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Lo anterior, en razón a que el acto administrativo antes mencionado, señala como valor total adeudado por concepto de intereses moratorios, a favor de la señora Lucia Castro de Navarro, un monto de **VEINTICUATRO MILLONES DIECISIETE MIL VEINTE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$24.017.020,24)**, manifestando en el mismo, que la fecha de solicitud se toma desde la radicación en debida forma de la totalidad de documentos requeridos por el pago por parte del demandante; así como también indica, que a partir del séptimo mes, contado desde la fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa, se empiezan a contar periodos muertos, si no se evidencia el pedimento dentro de los primeros seis meses.

(...)

Sombrado fuera de texto

Lo anterior, en razón a que el acto administrativo antes mencionado, señala como valor total adeudado por concepto de intereses moratorios, a favor de la señora Lucia Castro de Navarro, un monto de **VEINTICUATRO MILLONES DIECISIETE MIL VEINTE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$24.017.020,24)**, manifestando en el mismo, que la fecha de solicitud se toma desde la radicación en debida forma de la totalidad de documentos requeridos por el pago por parte del demandante; así como también indica, que a partir del séptimo mes, contado desde la fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa, se empiezan a contar periodos muertos, si no se evidencia el pedimento dentro de los primeros seis meses.

Por lo tanto, y según el ente ejecutado, una vez realizada la liquidación a partir del 17 de enero hasta el 16 de julio de 2011, con una base de liquidación de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHO PESOS CON UN CENTAVO (\$214.020.008,01)**, genera un valor total adeudado por la entidad de **VEINTICUATRO MILLONES DIECISIETE MIL VEINTE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$24.017.020,24)**, y no como se pretende en el proceso ejecutivo, el cual arriba un valor de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$27.382.590,84)**.

Al respecto debe decir el Despacho, que resulta inadmisibile que la entidad ejecutada profiera actos administrativos que vayan en contravía de lo resuelto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de providencia de fecha 20 de marzo de 2018, teniendo en cuenta que, dicha Corporación fue muy clara en señalar, que los intereses moratorios se causaron desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia y el día anterior al pago del retroactivo, esto es, **desde el 18 de enero hasta el 31 de agosto de 2011**, y no como lo afirma la entidad ejecutada, quien manifiesta que la liquidación de los intereses se debe realizar a **partir del 17 de enero hasta el 16 de julio de 2011**. Así mismo, debe señalar el

Despacho que dentro del presente asunto, no existe cesación de intereses, pues en el expediente quedó demostrado que la parte actora solicitó el cumplimiento del fallo, a través de pedimento radicado el 3 de marzo de 2011, tal y como lo señaló la Resolución UGM 001138 del 15 de julio de 2011, proferida en su momento por la extinta CAJANAL,⁴ por lo que la parte actora estuvo dentro del término legal para solicitar el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA, tal y como también quedó anotado en el auto que libró mandamiento de pago el 29 de abril de 2016⁵.

De la misma manera, dicha Corporación señaló, que las diferencias de las mesadas causadas con posterioridad a la ejecutoria, también generan intereses, que para el presente asunto, arrojó un monto de un **MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.450.774,98)**; por lo tanto, el valor total por concepto de intereses moratorios adeudado por la entidad ejecutada a favor de la ejecutante es de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$28.833.355.82)**, el cual debe ser indexado al momento del pago, tal y como lo señaló la providencia en precedencia.

Debe resaltarse por parte de éste Despacho Judicial, que en la audiencia de sustentación y fallo de que trata el artículo 327 del Código General del Proceso, se profirió fallo el día 20 de marzo de 2018, diligencia en la cual se encontraba presente el apoderado judicial de la entidad ejecutada Doctor Juan Sebastián Gutiérrez Miranda, por lo que en la respectiva acta de audiencia, no se vislumbra ninguna solicitud de aclaración de sentencia, tal y como consta a folios 187 a 196 del cuaderno No. 1º, quedando así, en firme la decisión tomada en dicha diligencia la cual fue notificada a las partes por estrados; por lo anterior, para el Despacho no resulta plausible, que la entidad ejecutada no de estricto cumplimiento a la orden impartida en Segunda Instancia, bajo el argumento que el valor pretendido dentro del proceso ejecutivo, difiere con el valor establecido en la liquidación realizada por la entidad, desconociendo flagrantemente la orden impartida por el Superior a través de la ya aludida providencia.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el acto administrativo identificado con numero RDP 011175 del 4 de abril de 2019, no se ajusta a la orden impartida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de providencia de data 20 de marzo de 2018, éste Despacho Judicial en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 numeral 4º del Código General del Proceso⁶,

⁴ Folios 53-61 Cuaderno No. 1

⁵ Folios 76-80 Cuaderno No. 1

⁶ **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

(...)

1. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.

ordena que por Secretaría, **se oficie** a la UGPP para que bajo la gravedad de juramento relacione todos los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad; lo anterior, con el fin de realizar el trámite que corresponde dentro de la presente demanda ejecutiva, al tenor de lo dispuesto en los artículos 446 y siguientes del Código General del Proceso.

Así mismo, **REQUIÉRASE POR SEGUNDA VEZ** a **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**, para que acredite el pago de la obligación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 447 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la liquidación de crédito realizada por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de providencia de data 20 de marzo de 2018.

Indíquese en el oficio que lo solicitado guarda concordancia con el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia consagrado en el art. 103 del C.P.A.C.A. Por lo tanto el **término** para dar respuesta será de **5 días, so pena de imponer las sanciones señaladas en los artículos 44 numeral 3° y 276 del C.G.P.**, que dispone “*Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.*”

Por otra parte, a través de memorial obrante a folio 204 del plenario, el apoderado de la parte ejecutante, solicita la expedición de la primera copia autentica con constancia de ejecutoria de las siguientes piezas procesales:

1. Auto que libró mandamiento de pago.
2. Acta de audiencia que ordenó seguir adelante con la ejecución.
3. Auto que aprobó la liquidación del crédito y,
4. Auto que aprobó la liquidación de costas.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión del art. 306 del CPACA., y por expresa orden del H. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, en providencia del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), rad: 2012-00395 (IJ), a costa de la parte actora, expídanse las copias solicitadas, previa consignación del arancel judicial correspondiente.

Frente a este punto, se tiene que el Acuerdo PCSJA18-11176 13 de diciembre de 2018, dejó plasmado que las certificaciones tendrían un costo, así “1. De las certificaciones: **Seis mil ochocientos pesos (\$6.800).**

Así las cosas, para la expedición de la certificación de copias auténticas de las piezas procesales antes enunciadas, la parte actora deberá consignar la suma de **Seis mil ochocientos pesos (\$6.800)**, valor que deberá depositar en la cuenta única nacional número **3-0820-000636-6 del Banco Agrario de Colombia**, identificando el criterio Rama Judicial – Derechos, Aranceles, Emolumentos, Costas y sus Rendimientos; **luego** deberá reproducir de forma completa las piezas procesales solicitadas para su autenticación, **las cuales se deberán allegar en memorial separado al pago del arancel judicial.**

El pago de dicha cantidad habrá de acreditarse mediante memorial radicado ante la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, luego de lo cual las piezas procesales solicitadas se entregarán al interesado **únicamente los días martes.**

Este Despacho Judicial aclara, que lo que se ordena es la expedición de **COPIA AUTÉNTICA CON CONSTANCIA DE EJECUTORIA**, de las piezas procesales antes enunciadas.



De la misma manera, debe advertir el despacho, que el presente proceso ejecutivo debe seguir las etapas subsiguientes del mismo, es decir, no puede el Profesional del Derecho solicitar el inicio de un nuevo proceso ejecutivo sobre el mismo que se encuentra activo, teniendo en cuenta que el Despacho debe dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 447 y siguientes del Código General del Proceso.

Aclarado lo anterior, y una vez realizado el trámite autorizado dentro del presente asunto, por secretaría ingrese nuevamente al Despacho el expediente para proferir la decisión que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO notifico a las partes la providencia anterior hoy 27 DE AGOSTO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
